

justificado por los certificados expedidos por la Aduana marítima de Campeche, que los efectos aprehendidos en la canoa: "Gabriela" marchaban amparados legalmente, y que el extravío de los documentos originales fué resultado de la ocupacion violenta de esa embarcacion por las fuerzas pronunciadas, el suscrito concluye pidiendo á esa 1.<sup>a</sup> Sala, que dando por revisadas estas actuaciones, extraña al C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito de Puebla por su omision en este negocio.

México, Enero 12 de 1874.—Altamirano.

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

Por revisado y en cuanto á lo demás que pide el Sr. Fiscal, dirijase una advertencia al C. Promotor fiscal del Circuito de Puebla, trascribiéndole el pedimento en lo conducente.

Devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.

Presidente.—José María Iglesias.—Ministros.—Pedro Ogazon.—Ignacio Ramirez.—S. Guzman.—José García Ramirez.—Landa, secretario.

Es copia. México, Enero 22 de 1874.—Landa, secretario.

## COMISO.

*Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el representante de la Hacienda pública, contra D. Benigno Roqueñi, con motivo de la aprehension que se le hizo de la cantidad de seiscientos pesos en oro, que exportaba sin haber hecho previamente el correspondiente pago de los derechos fiscales.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Heróica Veracruz, Julio 11 de 1873. Visto éste juicio de comiso de la suma de seiscientos pesos en oro, aprehendidos á D. Benigno Roqueñi; el parte relativo de ésta aprehension hecha por el celador del resguardo marítimo de éste Puerto, Juan Hernández; las diligencias iniciadas por la Aduana marítima, requiriendo al interesado para la eleccion del recurso, y en las cuales aparece, que optó por el judicial; el auto de este Juzgado en que se señaló el día y hora correspondientes para la celebracion del juicio; lo alegado por el Contador interino de la Aduana Marítima, en el acta del día 28 de Mayo del presente año, así como tambien lo manifestado por el representante del interesado en favor de los derechos de este, y lo pedido por el C. Promotor fiscal, á lo que se accedió por el Juzgado abriendo este negocio á prueba por el termino de ocho dias. Vistas las pruebas testimoniales rendidas por las partes; lo nuevamente alegado por el C. Lic. Lopez en favor del interesado; lo pedido por el C. Promotor fiscal, sosteniendo que la suma expresada anteriormente ha incurrido en la pena de comiso, y el auto de citacion para sentencia; y Considerando que el hecho material de habérsele encontrado al Sr. Roqueñi, la cantidad de seiscientos pesos en oro, despues de registrado su equipage y en momentos de embarcarse para el extranjero, es una prueba palmaria

de que los exportaba de este puerto; que esta exportación la verificaba ocultamente, puesto que la circunstancia de llevar dicha cantidad dentro de dos lienzos recosturados, escondida debajo de la ropa y fajada al pecho, está probando, por parte del exportador la marcada intención de que no se supiese la extracción de la repetida suma, por que en caso contrario la habría llevado dentro de su baul ó maleta.

Considerando: que la fracción 2ª del artículo 80 del arancel vigente en que se habla de la obligación de despacharse á los pasajeros dentro del menor tiempo posible al reconocerse sus equipages, previniendo además que en casos de ser extranjeros que no hablen ó no entiendan la lengua española, sirva de intérprete un empleado que les advierta de los requisitos y formalidades á que deben sujetarse, se refiere única y exclusivamente á los pasajeros que ingresen á este puerto y no á los que salgan de él, pues terminantemente lo expresa dicho artículo 80; que por consiguiente, la Aduana marítima no está en la obligación de avisar á los pasajeros que salgan; los requisitos que deben cumplir respecto á las mercancías ó efectos que exporten; porque dichos pasajeros la tienen de saber ó de informarse de tales requisitos y formalidades; que sin embargo de esto, constando que la espresada Aduana, en obvio de perjuicios á los pasajeros que salen, há mandado imprimir en cuatro idiomas las prevenciones fiscales respecto á dichos pasajeros, con objeto de hacerlas saber para que no aleguen ignorancia, la que tampoco les sería excusable; que constá así mismo en autos por manifestación del mismo abogado C. Lopez, que á su representante el C. Roquellí, se le dió una de esas ojas impresas, lo cual, á nadie puede ocultársele, que fué con el objeto de que se impusiera de ella y si no lo hizo, no es está una razón que pueda excusarlo de cualquiera pena que la ley imponga en el caso de que se trata.

Considerando así mismo: que aun cuan-

do se admitiese que al registrarse el equipage del espresado pasajero no se le presentó la mencionada hoja impresa, ni se le hizo pregunta alguna sobre si llevaba dinero ó alguna otra mercancía que causase derechos aduanales, tampoco sería una razón que le evitase aquella pena, puesto que como antes se ha visto no hay obligación legal para hacer indicaciones ó advertencias sobre este punto á los pasajeros que salen, sino que esto se ha dispuesto oficiosamente por el Administrador de la Aduana y en obsequio de esos mismos pasajeros.

Considerando por último: que según la circular de 1º de Junio de 1872, toda exportación clandestina de metales preciosos, se considere, en cualquiera forma, como caso de contrabando, con cuanto mas ver y considerar conyino, y de conformidad con la circular que acaba de citarse, este Juzgado falla.

Primero: se declaran caídos en la pena de comiso los seiscientos pesos que en ore pretendia exportar de este puerto D. Benigno Roquellí, clandestinamente, y le fueron aprehendidos por el eclador Juan Hernandez.

Segundo: notifíquese y si no se interpusiere recurso alguno legal, sáquense las copias prevenidas por la ley para el Administrador de la Aduana marítima y "Semana-rio Judicial de la Federacion"; elévense los autos á la superioridad para su revision.

Así lo mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado.

Lo certificamos.—*Lic. Luiz I. Gomes.*  
—*José Maria Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado de Circuito.

En el juicio de comiso á que hace mencion el C. Lic. Manuel A. Lopez, en su escrito de 29 de Julio último, está demostrado palpablemente el hecho de que D. Benigno

Roqueñí, al embarcarse para el extranjero, llevaba oculta una cantidad de dinero que no manifestó á la Aduana, y que le fué descubierta por el C. celador Juan Hernández, quien dió parte al Comandante del resguardo marítimo, para lo que tuviera á bien disponer; así mismo está demostrado, que se le entregó el aviso impreso de fojas 8 del expediente, que hace la advertencia á todos y cada uno de los pasajeros que salen del país, de la obligación que tienen de hacer la respectiva manifestación del dinero que lleven consigo, bajo la pena de que si la omiten les será confiscado.

Este hecho aclarado en el Juzgado de Distrito de Veracruz, y confesado por el Sr. Roqueñí, sugetándolo á la ley, dá por resultado que el dinero en cuestión ha caído en la pena de comiso de que no puede absolverse en esta instancia, sino es contraviniendo dicha ley en su espíritu y letra. En efecto, la suprema disposición de 19 de Junio del año próximo pasado, impone la pérdida total de las cantidades que se exporten sin la previa manifestación.

Esta suprema resolución no es condicional sino absoluta, y para su cumplimiento no exige ninguna de las formalidades que se practican en la Aduana á favor de los pasajeros: de ahí es, que todo individuo está en la estrecha obligación de observarla por solo la circunstancia de que esté publicada bajo la pena que ella establece. Pues en el caso D. Benigno Roqueñí, no observó lo preceptuado en la resolución suprema mencionada, una vez que no hizo la manifestación del dinero que exportaba, á su debido tiempo, y por este principio se hizo acreedor á la pena que le fué impuesta de confiscación.

No le vale para libertarse, la escepcion de que no leyó el aviso de la Aduana, ni el que el comisionado de esta no le hubiera preguntado nada sobre si llevaba ó no dinero. No le vale lo primero, porque si no leyó el aviso, fué por culpa suya, por una omisión incalificable, y principalmente por que

no es requisito de ley el que se reparta á los pasajeros, sino que por mera gracia de la Administración se hace, á fin de expeditar el despacho y de que nadie alegue ignorancia; tampoco le salva lo segundo, por la misma causa, porque la ley no impone la obligación á ningún empleado de aquella oficina, de hacer advertencias á los pasajeros. Así es que bajo el supuesto de que sea cierto todo cuanto se expone de parte del C. Lic. Lopez, para convencer de que su podatario no tuvo ánimo de defraudar los derechos fiscales, no queda eximido de la pena á que está condenado.

Tampoco le favorece la fracción 2ª del artículo 80 del Arancel vigente, ni la práctica constante de la Aduana en advertir á los pasajeros de palabra los requisitos á que tienen que sugetarse conforme al mismo Arancel, por que la fracción citada no comprende el caso de los pasajeros que salen, sino de los que entran á la República, y por que la práctica que se alega ni está probada competentemente, ni puede tener por ahora fuerza de ley, en razón al poquísimos tiempo que lleva de publicado el Arancel de Aduanas marítimas, que es el que establece ciertas formalidades para la exportación de toda clase de efectos.

Por último, la interpretación que el repetido C. Lic. Lopez, quiere darle á la resolución de 19 de Junio de que he hablado antes, que impone la pena de comiso á la exportación clandestina de metales, á ser exacta, (que desde luego no lo es) en el caso, está bastante probada la clandestinidad ó fraudulencia de la exportación que pensó consumar el Sr. Roqueñí: en consecuencia, ni aun así se le puede modificar la pena. Está probado ese fraude, con no haber hecho D. Benigno Roqueñí, la manifestación del dinero que ocultaba, después que recibió el aviso, y después que uno de los empleados le preguntó si lo llevaba.

Que recibió el aviso al ser despachado, es decir, con toda oportunidad; él y su abogado

ó apoderado, lo tienen confesado en autos; mas se alega que no lo leyó. No es creíble C. Magistrado, tal circunstancia: el anuncio aquel se compone de muy cortas líneas, y es preciso que si el Sr. Roquéñi ignoraba lo que tenía que hacer para arreglar su pasaje, hubiera pasado la vista por ellas aunque no hubiera sido mas que por mera curiosidad. Debe presumirse legalmente que si lo leyó, y no obstante su información, quizo correr el albur de pasar por alto los seiscientos pesos que le fueron encontrados. Pero pasemos que en efecto fué tanto el descuido del interesado, que el anuncio susodicho se lo guardó en el bolsillo sin hacerle ningun aprecio.

¿Podemos decir lo mismo respecto á la pregunta que le dirigió el empleado al despacharlo? El Sr. Roquéñi no quiere admitir la verdad de esta pregunta; mas los CC. Miguel Marquez, Francisco Arias, José María Rodríguez y Perfecto de la Cerda, han declarado que sí se le hizo, y que él contestó que nada llevaba.

Las declaraciones de estos Señores merecen entera fé, por ser uniformes y por fundar la razon de su dicho en haber presenciado lo ocurrido. No les sirve de impedimento el que sean empleados, porque á estos no les está prohibido el ser testigos y mucho menos en cosas que no les atañen ni les interesan.

Y aunque esta prueba trató de destruirla la parte del C. Lopez, no lo consiguió indudablemente; porque solo pudo presentar dos testigos de profesion cargadores, que en manera alguna destruyen el dicho de los cuatro empleados que por todos títulos son superiores, tanto en número como en posición, para darles mayor crédito.

En consecuencia, de todos modos que se considere el caso que nos ocupa, está plenamente probado que la exportacion que trataba de hacer el Sr. Roquéñi de los seiscientos pesos, de que trata este juicio, era contra el tenor expreso de la Suprema re-

solucion de 19 de Junio de 1872, y que por esta causa cayeron en la pena de comiso. Atendiendo á esta Suprema resolucien, y á todos los demas fundamentos en que descansa la sentencia que el Juzgado de Distrito de Veracruz pronunció el día 11 de Julio, el Promotor le pide á V. se sirva confirmarla en todas sus partes, por ser así de justicia.

Puebla de Zaragoza, Octubre 3 de 1873.  
—E. Sanchez.

Otro sí digo: que pues que la parte contraria ha renunciado todo trámite en el presente negocio, que tambien le renunció, y quedó desde luego citado como él para sentencia. —Fecha ut supra.—E. Sanchez.

#### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

Puebla de Zaragoza, 11 de Octubre de 1873.—Visto el juicio verbal sobre comiso, seguido en el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el representante de la Hacienda pública, contra D. Benigno Roquéñi, con motivo de la aprehension que se le hizo de la cantidad de seiscientos pesos en oro, que exportaba sin haber hecho previamente el correspondiente pago de los derechos fiscales; sus alegatos y la sentencia pronunciada en 11 de Julio último, en la que, por los fundamentos de hecho y de derecho que se expresan, se resolvió: que han caído en la pena de comiso los seiscientos pesos que en oro pretendia exportar de ese Puerto D. Benigno Roquéñi clandestinamente, y le fueron aprehendidos por el celador Juan Hernandez; la apelacion que contra esa sentencia se interpuso por la parte de Roquéñi y que le fué admitida; su escrito de expresion de agravios, y lo contestado por el Ministerio fiscal, así como la renuncia que hicieron de todo trámite, y su citacion para sentencia. Considerando: que al presentarse D. Benigno Roquéñi á los empleados de la Aduana marítima de Veracruz, para que se le despachase su equipage, no ha manifestado que era portador de la cantidad de

seiscientos pesos en oro, que trataba de exportar para fuera de la República: que la omisión de ese requisito, unida al hecho de embarcarse en el bote que lo iba á conducir al vapor francés "Gnadalupe," demuestran con evidencia, que no tenía intención de hacer la correspondiente manifestación de la cantidad de dinero que exportaba: que ante estos hechos nada arguye á su favor la circunstancia de que hubiera confesado que era portador de la cantidad referida, al ser interrogado sobre este particular, en el acto de embarcarse, por el celador Juan Hernandez, pues es indudable que si tal pregunta no se le hace, la exportación se verifica sin el previo pago de los derechos fiscales; que si por parte del Sr. Roqueñí, se ha tratado de probar que al ser examinado su equipaje, el celador Hernandez le dijo que podía irse, sin haberle hecho pregunta algún respecto de dinero, ni haberle hecho otra clase de advertencia, no consiguió su intento; ya se atiende á la prueba que por la parte contraria se rindió, y ya también á la confesión hecha por el Sr. Roqueñí, en la que aparece: que al tiempo de examinarse su equipaje, se le entregó el aviso en cuatro idiomas, en que se advierte á los pasajeros la obligación en que están de manifestar las cantidades que exportan, para que se haga el correspondiente pago de derechos, bajo la pena de confiscación, con arreglo á la Suprema disposición de 1.º de Junio de 1872. Por tales fundamentos y consideraciones, y por los demas en que se apoya la sentencia de 1.ª instancia y de conformidad con el pedimento fiscal, éste Tribunal declara: que debía confirmar y confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Veracruz, en 11 de Julio último, en la que se falló, que han caído en la pena de comiso los seiscientos pesos que en oro se aprehendieron á D. Benigno Roqueñí.

Hágase saber, dirigiéndose al referido Juzgado el despacho correspondiente con

inserción de esta sentencia, para que la notifique al representante del Sr. Roqueñí, y cuide que se haga por él la reposición del papel respectivo, á cuyo fin se certificará por la Secretaría, los sellos que deban ponerse. En seguida se remitirá á la Adm. de Veracruz testimonio de esta sentencia, y se elevarán los autos para su revisión á la 1.ª Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El C. Lic. Miguel Sandoval, Magistrado de este Tribunal de Circuito, así lo mandó y firmó. Doy fé.—*Miguel Sandoval.*—*Helipe J. Almazan.*

Es copia de su original que certifico para su inserción en el Semanario Judicial.—*Helipe J. Almazan*, secretario.

#### *Pedimento del Q. Procurador general de la Nacion.*

El Fiscal, en calidad de Procurador general de la Nacion, dice: que por el Juzgado de Distrito de Veracruz, se comenzaron á instruir las presentes diligencias contra D. Benigno Roqueñí, por exportación fraudulenta de la cantidad de seiscientos pesos en moneda de oro, que le fué aprehendida por el celador Juan Hernandez, al momento de darse á la vela para el extranjero. Varias fueron las razones alegadas por el patrono de Roqueñí, para justificar la exportación del dinero mencionado; pero ninguna satisfizo y con razón á la autoridad judicial, por la que esta sentenció en 1.ª instancia y con fecha 11 de Julio del año próximo pasado: "han caído en la pena de comiso, los seiscientos pesos que en oro pretendía exportar de este puerto, (Veracruz) D. Benigno Roqueñí, clandestinamente, y le fueron aprehendidos por el celador Juan Hernandez."

Vista esta sentencia en 2.ª instancia, por apelación que interpuso el patrono de Roqueñí, el Tribunal de Circuito de Puebla, con fecha 11 de Octubre próximo anterior, confirmando el fallo de su inferior, declaró: "Han caído en la pena de comiso, los seis-

cientos pesos que en oro se aprehendieron á D. Benigno Roquellí.

Como se nota, el fallo de vista ha causado ejecutoria, y por lo mismo, el suscrito limitándose como en efecto debe limitarse únicamente al punto de responsabilidad, manifestó: que no encontrando defectos graves de sustanciación, no tiene motivo para promover ese juicio; pero se hace notar á la Sala, que la sentencia de 2ª instancia es muy probable, casi seguro, que ha sido notificada, y sin embargo en los autos no consta razon alguna en ese sentido.

El Procurador entiende, que á fin de no dilatar el término de este negocio, y en atención á que la constancia que se hecha de menos en el expediente no puede importar, en este caso especial, una exigencia, un requisito tal que sin él no puedan continuarse estos autos, opina que dándose por revisado este proceso, se diga al Tribunal de Circuito remitente, cuide de cubrir en estos autos la falta que se ha extrañado, y que en lo sucesivo, procure tener igual cuidado.

México, Enero 20 de 1874.—*Altamirano.*

#### *Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia:*

México, Enero 30 de 1874.—Como parece al C. Fiscal, por revisado y no hallando mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, haciéndose notar al Tribunal de Circuito, la falta que advierte el C. Fiscal, y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—M. Auza.—S. Guzman.—Enrique Landa, secretario.*

Es copia. México, Febrero 19 de 1873.—*Alejo Gomez Egúarte, oficial mayor.*

## CRIMINAL.

*Causa seguida en el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, contra Cecilio Balam, por el extravío de la correspondencia extraordinaria que le fué entregada en Valladolid por el C. Administrador subalterno de correos, á fin de que la condujera á Mérida.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

Si el indígena Cecilio Balam hubiese insistido en sostener, como dijo en su primera declaracion, que la correspondencia que le entregó el C. Administrador de correos de Valladolid el 10 de Abril próximo pasado, la entregó á un transeunte desconocido que se dirigia al pueblo de Mayma, el fiscal pediría que se abriera á prueba esta causa, no precisamente para buscar en la justificación de esa entrega la exculpacion del conductor, sino para inquirir quien haya sido el que recibió dicha correspondencia y la desvió de su destino, tomándose ademá el dinero con que debia pagarse su conduccion hasta el punto extremo. Pero habiendo confesado Balam, en su declaracion agravatoria, que se embriagó ó que á consecuencia de haber tomado un poco de aguardiente sufrió dicha pérdida, la responsabilidad de esta falta recae exclusivamente contra él y no necesita de mas justificación que la que resulta de su propia confesion, en la que concurren todos los requisitos de la ley para producir prueba plena en juicios criminales como el presente. Para estimar, sin embargo, la pena con que ha de ser castigada dicha falta, es necesario considerar que el indígena que la cometió no es conductor de oficio ó empleado de ninguna administracion de correos, para que pueda castigásele con el rigor que quiere la ordenanza de ese ramo del servicio público; pues no disfrutando de las ventajas concedidas por la misma